



# JUICIO DE AMPARO: 1602/2018

722

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

## JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

6315/2019 TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

6316/2019 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)

ACTUARÍA

FIRMA:

RECIBÍ OFICIOS

En los autos del juicio de amparo 1602/2018, promovido por [REDACTED] contra actos de autoridades administrativas, se dictó lo siguiente:

En la Ciudad de México, a las once horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, Alma Delia Aguilar Chávez Nava, Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida por el Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el juicio de amparo 1602/2018.

Acto seguido, el Secretario hace constar que se tiene a la vista la libreta de registro de promociones que se lleva en este Juzgado de Distrito y CERTIFICA: que hasta las once horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve, no se encuentra registrada de recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ninguna promoción dirigida al presente expediente; asimismo, hace relación de los autos y da cuenta con la constancia y certificación del Secretario de este Juzgado de Distrito, relativa a la debida integración del expediente en que se actúa; con la admisión de la demanda de garantías efectuada mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 34) y con las constancias de notificación a las partes.

Enseguida, la Jueza acuerda: téngase por hecha la manifestación que antecede para todos los efectos legales conducentes.

A continuación, se abre el período probatorio y se informa a la Jueza de Distrito que únicamente la parte quejosa ofreció como pruebas, las documentales que en copia fotostática simple obran en autos (fojas 16 a 20).

La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la resolución correspondiente.

En período de alegatos, el Secretario informa que ninguna de las partes los formuló.

Asimismo, se informa a la Jueza de Distrito con la manifestación de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento.

La Jueza acuerda: ténganse por hecha la manifestación que antecede para los efectos



14:00  
FECHA

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1602/2018 promovido por [REDACTED], por propio derecho, contra actos de la Titular de la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México y de otra autoridad; y,

## RESULTANDO.

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 15), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el día dieciocho siguiente a este Juzgado Decimoquinto en la materia y sede antes citados, Daniela Gicela Álvarez Camacho, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se transcriben a continuación:

### Autoridades responsables:

*"TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.*

*SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO."*

### Actos reclamados:

*"(...) PRIMERO. De la Alcaldía de Tlalpan señalada anteriormente se reclama la omisión de proporcionarnos a los concejales la información necesaria para aprobar el presupuesto de la Alcaldía de referencia dado que:*

*(...)*

*SEGUNDO. De la Alcaldía de Tlalpan la omisión consistente en integrar el Presupuesto de la Alcaldía conforme lo establece la ley de la materia; el cual se debe de aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad; pues se omite proporcionarnos información sobre autogenerados proyectados de la Alcaldía, así como demás estimaciones que me apoyen en mi labor como concejal. Lo cual viola los artículos 16 y 122 fracción VI inciso C, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 104 y 127 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México.*

*TERCERO. De la Alcaldía de Tlalpan, la violación a mi Derecho Fundamental a la no discriminación ya que se me coarto mi derecho para discutir el presupuesto, presentar reservas al mismo y se omitió someterlo a votación en lo particular, con lo cual no tuve intervención necesaria que me permitiera desempeñar de manera adecuada mi derecho y obligación consistente en Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Alcaldía que represento. Lo cual viola los artículos 1, 16 y 122 fracción VI inciso C, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 104 y 127 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México. De igual forma viola el artículo 58 del Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan."*

La parte quejosa precisó como precepto vulnerado en su perjuicio, el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**SEGUNDO.** Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 25), este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registró la demanda con el número de expediente 1602/2018 y, al advertir diversas irregularidades se previno a la promovente para que dentro del término de cinco días las desahogara, en cumplimiento a lo requerido, a través del escrito recibido en este Juzgado el día veinticuatro siguiente (fojas 29 y 30), la quejosa señaló, en la parte que interesa destacar, lo siguiente:

*"Para tal efecto se aclara que el pasado día cinco de diciembre del presente año, en sesión pública de consejo dentro del edificio sede de gobierno de la Ciudad de México,*



sobre las previsiones de ingresos de la hacienda pública, así como demás ingresos provenientes de la federación destinados a dicha demarcación. A su vez también se le solicitó información sobre los recursos por concepto de ingresos de aplicación automática, por el uso de bienes del dominio público que están asignados y por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público.

Ante dicha petición sólo recibí negativa al acceso de la información requerida en mi calidad de Concejal de la Alcaldía de Tlalpan, violando este derecho...

b) Si lo que pretende reclamar es una negativa verbal de entregar la información que indica, para lo que deberá manifestar la fecha y forma en que tuvo verificativo dicha negativa.

Para tal efecto se aclara conforme a lo mencionado en los párrafos anteriores, que dicho acto se llevó a cabo el pasado día 5 de diciembre de dos mil ocho (sic), esto durante la celebración de la segunda sesión ordinaria del Consejo de Tlalpan. Dicha petición a la información mencionada se hizo de forma verbal y recibiendo la negativa por la misma vía."

TERCERO. Por auto dictado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 31 a 34), se tuvo a la quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada y, por ende, se admitió a trámite la demanda de amparo, se le requirió a las autoridades demandadas su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.

Una vez substanciado el juicio de amparo en todas sus etapas, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, que concluye con el dictado de esta sentencia; y,

#### CONSIDERANDO.

PRIMERO. Este Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de garantías, conforme a los preceptos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto primero, fracción I; el punto segundo, fracción I, numeral 3; y, el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis; toda vez que se reclama un acto a dos autoridades administrativas con residencia en la Ciudad de México, ámbito territorial y material en el cual este juzgado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de garantías.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, jurisprudencia que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

La orden verbal de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se determinó negar a la aquí quejosa la información sobre las previsiones de ingreso de la hacienda pública, ingresos provenientes de la federación destinados a la Alcaldía Tlalpan, así como los ingresos por concepto de uso de bienes de dominio público, con el fin de revisar la debida integración del proyecto de presupuesto de la citada Alcaldía.

**TERCERO.** No es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Titular de la Alcaldía de Tlalpan y Secretario de Administración y Finanzas, ambos de la Ciudad de México, que la aquí quejosa hace consistir en la orden verbal de cinco de diciembre de dos mil dieciocho en la que se determinó negar a la aquí quejosa la información sobre las previsiones de ingreso de la hacienda pública, ingresos provenientes de la federación destinados a la Alcaldía Tlalpan, así como los ingresos por concepto de uso de bienes de dominio público, con el fin de revisar la debida integración del proyecto de presupuesto de la citada Alcaldía.

Lo anterior, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación, así lo expresaron las citadas autoridades responsables (fojas 40 y 45 a 46), sin que la peticionaria de garantías ofreciera pruebas idóneas, ni se advierta de autos alguna que desvirtúe tales negativas, ya que al tratarse de actos positivos, los cuales se traducen en conductas de hacer de las autoridades, corresponde a la parte quejosa probar la existencia de tales actos impugnados, ante las negativas de las autoridades responsables.

Sobre este punto, es aplicable la jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 77, tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 210,769, de rubro y texto siguientes:

**"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.** En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados."

En efecto, la ahora quejosa fue omisa en ofrecer algún medio probatorio idóneo con el que demostrara la existencia de los actos que impugna y, de las constancias de autos, se advierte que no existen constancias que demuestren la certeza de los actos reclamados, respecto de las autoridades citadas, ni aun de manera presuntiva o indiciaria.

Lo anterior, toda vez que la quejosa únicamente ofreció como pruebas, las documentales consistentes en:

1. Copia simple de la integración de las alcaldías en la Ciudad de México, específicamente, de la Delegación Tlalpan (foja 16).
2. Copia simple de la orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan (foja 17).
3. Copia simple de los documentos titulados: "Comparativo Presupuesto de Egresos 2018-2019", "Presupuesto de Egresos 2019 Distribución del Techo Presupuestal por Capítulo de Gasto" y "Presupuesto de Egresos 2019" (fojas 18 a 20).

Documentales que carecen de valor probatorio pleno, en términos de la facultad que se otorga a la suscrita en el artículo 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; respecto de lo cual es aplicable, la jurisprudencia número IV.3º. J/23, publicada en la página 510, el Tomo III, mayo de 1996, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente:

**"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE.** No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de los documentos que se ofrecen."



convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

También resulta aplicable la tesis II.1o.C.T.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo, consultable en la página 504, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, que dispone lo siguiente:

**"COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO.** No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria."

Sin embargo, no obstante que se otorgara valor probatorio indiciario a las documentales anteriormente referidas, con éstas únicamente se acreditaría, en su caso, como se integra la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México; y que el día cinco de diciembre de dos mil dieciocho se llevaría a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; pero no desvirtúa la negativa de las autoridades responsables antes citadas en relación con los actos reclamados por esta vía, los cuales quedaron precisados en el considerando que antecede.

Por lo tanto, atento la naturaleza de los referidos actos reclamados y, al no haber aportado la solicitante del amparo, medio de convicción alguno con el que acredite fehacientemente la existencia de éstos, queda firme la negativa propuesta por tales autoridades responsables.

Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos formulados en ella, se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello, acreditar sus afirmaciones.

Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Séptima Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 14, que literalmente dispone lo siguiente:

**"ACTO RECLAMADO, TEXTO DEL. NO SE ACREDITA CON LA DEMANDA DE AMPARO.** Toda vez que la demanda de garantías contiene simples manifestaciones del quejoso, aunque en ella se transcriba el texto del acuerdo combatido, no es prueba idónea para acreditar ese extremo, a pesar de que la autoridad responsable no rinda informe justificado, sino que se requiere que se exhiba el documento fehaciente que contenga el propio acuerdo."

De igual forma es aplicable, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198, Sexta Parte, página 12, que literalmente establece lo siguiente: **"ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES."**

En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garantías, en relación con el acto reclamado y autoridades precisadas en el presente considerando de esta resolución.

reclamados atribuibles a las autoridades señaladas como responsables, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para determinar la inexistencia del acto reclamado, si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, pues la suscrita juzgadora está obligada a proceder en tales términos, de acuerdo con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.

En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación; página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo rubro enseguida se transcribe: **"DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA."**

En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la ahora parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: **"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."**

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se,

#### RESUELVE

**ÚNICO.** Se **SOBRESEE** en el presente juicio de amparo 1602/2018, promovido por Daniela Gicela Álvarez Camacho, por propio derecho, por el acto y autoridades precisadas en el último considerando de esta sentencia y por los fundamentos y motivos expuestos en él.

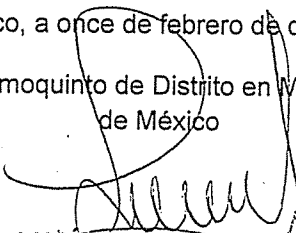
**NOTIFÍQUESE;** y, elabórese la versión pública de esta sentencia, para integrarla al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Así lo resolvió y firma la licenciada Alma Delia Aguilar Chávez Nava, Jueza Décima Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida por Lucía Ruíz Antonio, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a once de febrero de dos mil diecinueve.

La Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

  
LUCÍA RUIZ-ANTONIO





JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO

10749/2019 TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN (AUTORIDAD  
RESPONSABLE)

10750/2019 SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

ACTUARÍA FIRMA:

RECIBÍ OFICIOS

En los autos del juicio de amparo 1602/2018, promovido por [REDACTED]  
[REDACTED] contra actos de autoridades administrativas:

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara QUE HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

En consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo.

Por otra parte, atento a lo ordenado en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General antes citado, en el que se determina que son susceptibles de depuración y destrucción los expedientes auxiliares relativos a los juicios de amparo que, cuenten con más de seis meses de concluidos, carezcan de relevancia documental y no contengan información clasificada como reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información, se hace constar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurra dicho término, se ordena dar cumplimiento al acuerdo aludido y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general.

De igual forma, vista la certificación de cuenta y de conformidad a lo ordenado en el punto vigésimo, primero, fracción III, del Acuerdo General antes aludido, se establece que el incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, por haberse negado la medida cautelar solicitada.

Por lo tanto, transcurridos los términos establecidos en los puntos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se ordena depurar o destruir los expedientes judiciales, en los términos precisados.

Ahora bien, tomando en consideración que, según se advierte de la certificación que antecede, en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes (en términos de lo previsto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles).

en sentido contrario, en concordancia con el vigésimo primero, ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se deja a salvo el derecho de las partes para que dentro del término de seis meses soliciten la devolución de los documentos diversos a los mencionados que hayan exhibido en el presente juicio de garantías, en el entendido de que el primero de los puntos mencionados en su fracción XVIII especifica qué debe entenderse por documento original, según la transcripción siguiente:

"XVIII. Documento original: Todo aquel soporte impreso que contenga un rango distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales."

Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma Alma Delia Aguilar Chávez Nava, Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida por Lucía Ruíz Antonio, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Lo que hago de su conocimiento para todos los efectos legales conducentes.

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Lucía Ruíz Antonio

